

Vida Internacional

ESTANCAMIENTO PELIGROSO

Desde el mismo discurso de inauguración de la Reunión por el presidente Alessandri, uno de los leitmotivos de los debates fue "la comprobación de que el producto bruto de esta parte del continente no aumenta como debiera", según dijo el propio mandatario chileno. "Este hecho es tanto más grave —añadió— cuanto que la población aumenta a un ritmo más acelerado que en cualquiera otra región del globo y que las legítimas aspiraciones de nuestros pueblos a una vida mejor se estrellan con las tremendas limitaciones de la realidad económica. Las presiones sociales se hacen así cada vez más fuertes, asumiendo en ocasiones caracteres de violencia y apremio que llegan a estremecer las estructuras institucionales de nuestros países y... a poner también en peligro la paz continental".

En cambio, el observador ruso Sergio S. Mijailov, aprovechando la excelente tribuna que se le ofrecía para hacer propaganda a la Unión Soviética ante los delegados de un continente en desarrollo estancado, pudo darse el gusto de proclamar:

"El impetuoso desarrollo económico de la Unión Soviética tiene el fin de aumentar el nivel de vida de nuestro pueblo. Edificamos en brevísimos plazos nuevas ciudades socialistas y reconstruimos las viejas... Reducimos la jornada de trabajo y aumentamos los salarios; ampliamos las posibilidades de la enseñanza, la sanidad y los seguros sociales de los soviéticos. En 1960 se construyeron 2.400.000 departamentos, se instituyó la jornada de siete horas para obreros y empleados, y para los obreros ocupados en trabajos nocivos o peligrosos, la de seis horas. En 1964 se iniciará el paso a la semana de trabajo de 35 horas... Para 1965 se habrán suprimido por completo los impuestos que gravan a los trabajadores de la URSS..."

Naturalmente, en esta descripción paradisiaca el entusiasmo lleva a la exageración o al olvido de algunos pequeños "detalles", pero la tirada propagandística del observador soviético pudo servir para subrayar el tono más o menos diplomáticamente desolado con que los representantes latinoamericanos comprobaron las realidades económicas de su continente. Ese tono no estaba dictado, ciertamente, por el pesimismo sino por la comprobación objetiva de los hechos y por el deseo de enfrentarlos con criterio muy realista. Este es saludable en sí, pero resulta particularmente estimulante si se le compara con el criterio con que hasta hace unos años, la mayoría de las delegaciones de América Latina

enfrentaba la situación de sus países y sus relaciones con Estados Unidos en las conferencias interamericanas. Se diría que los delegados a esta reunión no lo eran de los mismos países cuyos gobiernos y prensa consideraron, hace dos años, que era un completo disparate la proposición de Fidel Castro en el sentido de que el Comité de los 21 —reunido entonces en Buenos Aires— pidiera a Estados Unidos una especie de Plan Marshall para América Latina, para aplicarse en un plazo de diez años y con un costo de 30.000 millones de dólares.

No es que los delegados latinoamericanos se dedicaran ahora —ni mucho menos— a hacer peticiones de ayuda a Estados Unidos, pero el cuadro de la economía de estos países que se pintó en la reciente reunión de Santiago es bastante distinto del que habitualmente presentaban los funcionarios del Departamento de Estado en la época en que las inversiones privadas y la "libre empresa" hacían maravillas en América Latina y no hacían más, sólo porque no se les daban mayores facilidades...

Ya se ha visto cómo esas inversiones privadas, aparte de hacerse en empresas explotadoras de materias primas de exportación, principalmente petróleo, han sido muy insuficientes. Así, cualitativa y cuantitativamente, ellas han fallado como resorte internacional para impulsar el desarrollo económico latinoamericano y, sin perjuicio de las medidas o recursos propios de cada país, ha sido necesario plantear en otra forma la colaboración internacional.

Los estudios de la CEPAL revelan que en 1958 el producto interno bruto de América Latina alcanzó a 59.062 millones de dólares; al año siguiente aumentó a 60.738 millones (dólares de valor constante, de 1950) y en 1960 fue de 62.987 millones. Los aumentos parecen importantes, pero para apreciarlos en su valor relativo, que es el que cuenta, hay que considerar que en el mismo lapso la población latinoamericana también ha crecido, y, por otro lado, los demás países del mundo también han progresado.

Teniendo en cuenta el primer factor resulta que en 1958 el producto bruto por habitante aumentó en un 1,6% con relación al año anterior; en 1959 creció en 0,3 con respecto a 1958, y en 1960, en 1,2% relativamente a 1959. En los últimos tres años, pues, el producto interno bruto per cápita ha crecido, "grosso modo", en 3,1%.

Esto significa que, dentro del desarrollo económico mundial y, particularmente, con respecto a las demás naciones occidentales, el conjunto de las de América Latina están quedando rezagadas. Su crecimiento en los últimos tres años es inferior al de los países de Europa Occidental en un solo año e inferior, incluso, al que han alcanzado algunos países subdesarrollados. De la comparación con el desarrollo soviético no sale en modo alguno bien librada la "democracia" en este continente tan lleno de posibilidades.

Dentro de este cuadro geneneral hay dos

excepciones notables, que son Brasil y México. En el primero, el producto interno bruto aumentó, "grosso modo", en casi 15% en los tres últimos años, y en el segundo, en 5,4%. En cambio, en la Argentina, Chile y Perú hay un retroceso neto. Eso es, evidentemente, desalentador y peligroso.

¿HACIA LA REFORMA TRIBUTARIA?

El problema casi general del estancamiento de la economía de los países latinoamericanos agrava seriamente el más generalizado aun de la extrema desigualdad en la distribución de los ingresos entre los diversos sectores de la población. Por una parte hay una extrema desigualdad a ese respecto entre los sectores rurales y urbanos. Aunque en la agricultura trabaja el 53% de la población activa latinoamericana, esa rama contribuye sólo con el 24% del producto interno bruto. Se ha calculado, por ejemplo, que en Venezuela, en 1957, los ingresos en la capital promediaban diez veces el ingreso rural. Por otra parte, existe una desproporción más notable aun entre la porción del ingreso que va a manos de una minoría y la que percibe la gran mayoría de la población. Se estimaba en 1947 que, en Colombia, el 2,6% de la población disfrutaba del 30% de la renta nacional, mientras en el otro extremo el 87,7% de los colombianos tenía que repartirse el 57%. En México, en 1950, el 5% de las familias más adineradas percibió el 40% del ingreso total, casi el doble de lo que al mismo sector le corresponde en Estados Unidos. En su comentado "Estudio sobre la distribución del ingreso en México", la economista Ifigenia Martínez de Navarrete afirma que entre 1950 y 1957, el 20% de la población que tiene los ingresos más bajos desmejoró en términos absolutos y en términos relativos; el 30% de los mexicanos que forman la categoría inmediatamente superior, aunque mejoró en términos reales (puesto que el ingreso nacional ha crecido) vio bajar su participación, y otro 10% se mantuvo en términos relativos y mejoró sus entradas en cifras absolutas. El 2,4% de la población del país, que en 1950 había recibido el 32,3% del ingreso familiar total de México vio reducida su cuota al 24%. En suma, a expensas de los mexicanos más pobres que forman la mitad del país y de la pequeña minoría de los riquísimos, mejoró su situación la clase media y la rica. Esta evolución mexicana puede considerarse más avanzada o favorable, desde el punto de vista social, que la de muchos países del continente.

No hay necesidad de insistir en cómo, dentro de una economía estancada y en retroceso con respecto a las demás de Occidente y del bloque soviético, el aumento de las diferencias de riqueza agrava las tensiones sociales.

Por otro lado, en fin, mediante la política tributaria, el Estado no ha hecho nada para operar una redistribución del ingreso, absorbiendo con fines de desarrollo económico o, en general, de beneficio social, una parte importante,

o siquiera proporcional, de las rentas altas. El carácter regresivo de los sistemas fiscales latinoamericanos aparece muy claramente en la exagerada importancia que tienen los impuestos indirectos —que gravan a la masa consumidora— con respecto al total de los impuestos. En Brasil, los impuestos indirectos constituyen el 75% de los impuestos totales; en la Argentina, el 60%; en Colombia, el 57%; en Chile y en Venezuela, si se excluyen los que pagan las grandes compañías mineras, muy importantes en los dos casos, los impuestos indirectos llegan al 67 y al 77% del total, respectivamente.

En un sistema impositivo más racional y justo tienen los Estados Latinoamericanos una palanca que Estados Unidos les está exigiendo ahora que usen si quieren recibir la colaboración prometida en la Alianza para el Progreso. No es justo —dicen— que el contribuyente norteamericano tenga que ser estrujado para que sus dólares vayan a ayudar a países cuyas clases acomodadas y dirigentes se niegan a hacer la parte que les corresponde en el financiamiento del progreso de sus respectivos pueblos. Además, si he mantienen las estructuras en vigencia, resultará inevitablemente que la mayor riqueza que se genere gracias a la colaboración internacional se va a acumular en gran parte en manos de los sectores ya acomodados, quedando el pueblo, como en el caso de México, peor aun que antes, relativamente al menos. En cambio, la aplicación de una reforma tributaria que grave progresivamente a las rentas altas y haga imposibles las evasiones de impuestos, de acuerdo con las normas aplicadas en los países adelantados, podría rendir —según los expertos norteamericanos— alrededor de 1.000 millones de dólares al año para el conjunto de América Latina. Considerando las modalidades de la economía y, sobre todo, las de la política de nuestro continente, la aplicación rigurosa y general de una reforma de ese tipo es, por ahora, una utopía. Pero, aunque el mayor rendimiento tributario previsto se redujera a un tercio de esos mil millones de dólares, resultaría una suma considerable desde luego, y se abriría el camino a mayores progresos en ese sentido.

No hay duda ninguna de que Estados Unidos presionará sobre ese punto tan decididamente como parece dispuesto a hacerlo sobre el de la reforma agraria y es posible que haya señales de ello en la reunión de ministros de Hacienda en Montevideo dentro de unas semanas. En la medida en que la CEPAL deba colaborar en los estudios y planes para la aplicación de la Alianza para el Progreso, es posible que le corresponda una labor decisiva en ese terreno tan difícil políticamente. En todo caso conviene tener presente que el de reforma agraria, hasta hace unos años nada más, parecía campo reservado a las incursiones de demagogos y agitadores y ahora nadie se ha escandalizado de los acuerdos tomados a ese respecto por la CEPAL.

ALEJANDRO MAGNET